



PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

Procedimiento iniciado de oficio

EXPEDIENTE: 02/2020-PSO-CG

DENUNCIADO: Instituto político *MORENA*

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

AUTORIDAD RESOLUTORA: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a treinta de enero de dos mil veintiuno.

Resolución que dicta el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado, en que se determina el incumplimiento del instituto político *MORENA* a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, al omitirse la publicación/actualización en su página de internet, de la información prevista en las fracciones: IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26 y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, con lo que se considera que existe una infracción a la normatividad electoral local conforme a lo dispuesto en los artículos 33, fracción XXIII y 346, fracción VIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 443, punto 1, inciso k, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

GLOSARIO

<i>Comisión de Quejas y Denuncias:</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Instituto:</i>	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>IACIP:</i>	Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
<i>Ley de transparencia:</i>	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato

<i>Ley electoral local:</i>	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Ley de partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>MORENA, denunciado:</i>	Movimiento de Regeneración Nacional (<i>MORENA</i>)
<i>Reglamento de quejas y denuncias:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UMA:</i>	Unidad de Medida y Actualización Diaria
<i>UTJCE:</i>	Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

ANTECEDENTES

I. Vista por parte del IACIP. El dieciocho de febrero, se recibió en la *UTJCE* el oficio P/239/2020, signado por el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, por medio del cual remitió el original del oficio IACIP/PPI-88/17/2019 y su anexo consistente en el instructivo identificado con número de expediente PDIOT-18/2019, relativo al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del sujeto obligado partido político *MORENA*. Lo anterior, para los efectos legales que se estimaran conducentes.

Conforme a lo establecido en el punto de acuerdo quinto del instructivo de fecha veintidós de enero de dos mil veinte emitido en el expediente PDIOT-18/2019, se ordenó dar vista al *Instituto* para que se resolviera lo conducente de conformidad con lo establecido en los artículos 33, fracción XXIII; 346, fracción VIII y 354 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 198 de la *Ley de transparencia*.

II. Radicación, registro y reserva de admisión o desechamiento. El dieciocho de febrero de dos mil veinte se radicó y registró el procedimiento sancionador ordinario con el número de expediente 2/2020-PSO-CG.

III. Diligencias de investigación preliminar. El dieciocho y veintisiete de febrero de dos mil veinte, la *UTJCE* solicitó al *IACIP* que remitiera copias certificadas de la totalidad de actuaciones del expediente PDIOT-18/2019, integrado con motivo de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia en contra del sujeto obligado partido político *MORENA*. Asimismo, que informara si tenía conocimiento sobre algún medio de impugnación promovido por *MORENA* en contra del acuerdo emitido el día veintidós de enero de dos mil veinte, en el expediente PDIOT-18/2019.

En ese sentido, se remitió a la *UTJCE* el oficio IACIP/SGA-23/17/2020, suscrito por el licenciado José Andrés Rizo Marín, Secretario General de Acuerdos del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a través del cual remitió la información solicitada.

El doce de agosto y ocho de septiembre de dos mil veinte la *UTJCE* ordenó requerir al *IACIP*, dicho lo cual, en cumplimiento a lo solicitado el quince de septiembre y doce de octubre del mismo año se presentaron los escritos signados por Rodrigo Sierra Ortiz, Director de Asuntos Jurídicos y por Juan Manuel Mares Flores, actuario, ambos del *IACIP*.

En el primero de los escritos referidos el *IACIP* informó que la denuncia con número PDIOT 18/2019 se encontraba en proceso de verificación de seguimiento, esto derivado de los compromisos asumidos por el sujeto obligado en sesiones de trabajo para la carga de la información faltante y la suspensión de plazos jurisdiccionales derivada de la pandemia del COVID-19 que emitió el pleno del *IACIP* en diversos acuerdos. Asimismo, comunicó que para la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, como en las páginas web de todos los sujetos obligados había sido prorrogado el plazo hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo que no obraban constancias posteriores al veintidós de enero de dos mil veinte. Finalmente, refirió que una vez concluido el procedimiento de seguimiento se procedería a comunicar el nuevo dictamen una vez aprobado por el pleno del *IACIP*.

En el segundo de los escritos mencionados el *IACIP* comunicó que una vez realizada la verificación virtual para corroborar que la información publicada en la página de internet que proporcionó *MORENA* se encontrara debidamente publicada y actualizada y en particular que se hubiesen solventado los requerimientos formulados mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, se emitió el informe de seguimiento del cual se observó que a pesar de los diversos requerimientos al denunciado, persistía el incumplimiento en la publicación/actualización de las obligaciones de transparencia siguientes:

- Con cumplimiento parcial:
Artículo 26, fracciones: IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII.
Artículo 33, fracciones: IV, V, VI, IX, X, XVII, XXVII y XXX.
- Con incumplimiento:
Artículo 33, fracción: XXIV.

Asimismo, se adjuntó el Informe de verificación al sujeto obligado: Partido político *MORENA*, Guanajuato, de fecha quince de septiembre de dos mil veinte.

IV. Admisión y emplazamiento. El doce de marzo de dos mil veinte, la *UTJCE* admitió el procedimiento a trámite, asimismo ordenó emplazar al instituto político *MORENA* corriéndole traslado con las constancias pertinentes.

Posteriormente, mediante auto dictado el doce de agosto de dos mil veinte, se tuvo al instituto político *MORENA* por no contestando las imputaciones que se le formularon.

V. Suspensión de plazos. Respecto a la sustanciación del presente procedimiento sancionador se precisa que, de conformidad con lo establecido en el acuerdo JEEIEEG/01/2020 aprobado por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto el diecinueve de marzo de dos mil veinte, como parte de las medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se suspendieron los plazos de los procedimientos sancionadores por el periodo comprendido del veintitrés de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte.

En la sesión extraordinaria celebrada el uno de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el acuerdo CGIEEG/009/2020, mediante el cual se amplió el plazo de implementación de medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia del COVID-19, y por ende, la suspensión de los plazos de los procedimientos sancionadores hasta el treinta de abril de dos mil veinte.

En la sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el acuerdo CGIEEG/010/2020, mediante el cual se modificó el acuerdo CGIEEG/009/2020 a efecto de ampliar el plazo de implementación de medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia del COVID-19, incluyendo la suspensión de plazos en los procedimientos sancionadores, hasta que dicho órgano superior de dirección acordara el término de la implementación de tales medidas.

VI. Reanudación de plazos. En la sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el acuerdo CGIEEG/033/2020, mediante el cual se emitió la *Estrategia para la reincorporación laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato* y se levantó la suspensión de los plazos de los procedimientos sancionadores.

VII. Ampliación del plazo de investigación. El primero de septiembre de dos mil veinte feneció el plazo de los cuarenta días para que la autoridad sustanciadora llevara a cabo la investigación dentro del procedimiento sancionador que nos ocupa, en esa misma fecha mediante auto se ordenó la ampliación de dicho plazo a efecto de contar con todos los elementos necesarios para la resolución del presente asunto.

VIII. Vista y cierre de instrucción. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, una vez recabadas las constancias necesarias y al estar en posibilidades de elaborar el proyecto de resolución correspondiente la *UTJCE* determinó el cierre de instrucción y ordenó poner a la vista del instituto político *MORENA* el expediente respectivo. Lo anterior, sin que el instituto político denunciado hiciera manifestación alguna.

IX. Remisión del anteproyecto de resolución a la Comisión de Quejas y Denuncias. Mediante el oficio *UTJCE/713/2020*, signado por el titular de la *UTJCE*, el doce de diciembre de dos mil veinte se remitió a la *Comisión de Quejas y Denuncias*, el proyecto de resolución del expediente 02/2020-PSO-CG.

X. Aprobación del proyecto de resolución por la Comisión de Quejas y Denuncias. En la sesión extraordinaria del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la *Comisión de Quejas y Denuncias* aprobó el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 02/2020-PSO-CG y ordenó su remisión al *Consejo General* para los efectos a que se refiere el último párrafo del artículo 368 de la *Ley electoral local*.

Lo hasta aquí asentado permite advertir el contexto de la cuestión puesta a consideración de esta autoridad administrativa electoral. Por lo tanto, para pronunciarse al respecto, es igualmente necesario el análisis técnico jurídico de las constancias referidas y sus efectos en el ámbito del procedimiento ordinario sancionador que nos ocupa.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Este *Consejo General* es competente para conocer y resolver del presente procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en los artículos 356, párrafo primero, fracción I, 361, 367 y 369 de la *Ley electoral local*; 12, párrafo primero, fracción I, 38, 45, 49 y 50 del *reglamento de quejas y denuncias*.

Por otra parte, es importante invocar la jurisprudencia 25/2015,¹ emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es: COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, mediante la cual se determinó que, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada:

- i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;
- ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales;
- iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
- iv) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a lo expuesto en el punto anterior, este *Consejo General* es competente para resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa, pues se actualiza el primero de los supuestos que el citado criterio jurisprudencial señala. Esto es, en la legislación electoral local se encuentra prevista como una infracción en que pueden incurrir los partidos políticos el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, pues el artículo 346, fracción VIII, de la *Ley electoral local*, señala:

Artículo 346. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

[...]

VIII. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información.

Asimismo, existe la obligación expresa que el diverso artículo 33, fracción XXIII de la *Ley electoral local* impone a los partidos políticos:

Artículo 33. Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

XXIII. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información les impone;

[...]

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el instituto político *MORENA* tenga registro nacional, puesto que nuestra legislación electoral local prevé a los partidos políticos nacionales y locales como sujetos de derechos y obligaciones,

¹ Emitida por la Sala Superior en sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que puede consultarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.

sin distinción alguna. En ese tenor, es menester transcribir lo previsto en los siguientes preceptos de la *Ley electoral local*, en los que se corrobora la competencia de este órgano para resolver el asunto:

Artículo 30. Los partidos políticos nacionales gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales y se sujetarán a las disposiciones de esta Ley en los procesos electorales locales; los estatales gozarán de esa personalidad desde el momento en que obtengan su registro ante el citado Instituto Estatal.

Artículo 44. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Sección será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General.

SEGUNDO. Principios del *ius puniendi*.² El procedimiento sancionador ordinario es una manifestación del *ius puniendi*; por el cual, tratándose del incumplimiento de un deber jurídico y por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (*ius puniendi*), todo organismo público —en el caso este *Consejo General*—, debe atender a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos constitucionales de legalidad y certeza; lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe:

- a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones. Esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta; en suma, el presupuesto de la sanción;
- b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;
- c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad), y
- d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (*odiosa sunt restringenda*),³ porque el ejercicio de ese poder correctivo estatal

² Derecho del Estado para imponer pena al transgresor de las conductas previstas como delito.

³ Lo desfavorable debe ser restringido.

debe ser mínimo, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.⁴

Por tanto, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal le son aplicables *mutatis mutandis*,⁵ al derecho administrativo sancionador, pues se considera que tanto el derecho administrativo sancionador como el derecho penal son manifestaciones del *ius puniendi* estatal.

En tal sentido, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el Estado de Derecho. Se destaca así que con la tipificación y sanción de infracciones administrativas se busca la tutela de intereses generados en el ámbito social, cuya finalidad es que la autoridad administrativa lleve a cabo su función.

Así, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de ilícitos. Por lo que es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a su objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del *ius puniendi*. Sirve de apoyo la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación XIV/2002 de rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.⁶

Lo anterior expuesto da sustento a este *Consejo General* para aplicar los principios correspondientes al *ius puniendi* en la resolución de fondo de la cuestión litigiosa analizada, al tratarse de un procedimiento sancionador regulado por la *Ley electoral local*.

TERCERO. Procedencia de la vía. Toda vez que los hechos materia de este expediente no corresponden a las conductas previstas por el artículo 370 de la

⁴ Al respecto véase la jurisprudencia 7/2005 de rubro: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278.

⁵ Haciendo los cambios necesarios.

⁶ Véase la Tesis XLV/2002 rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL *IUS PUNIENDI* DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, páginas 121 y 122.

Ley electoral local, que se tramitan por la vía especial, esto es, no corresponden a conductas que violen lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la *Constitución* (fracción I); o, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral (fracción II); o bien, constituyan actos anticipados de precampaña y campaña (fracción III); se concluye que el **procedimiento sancionador ordinario** resultó la vía adecuada para la sustanciación del presente procedimiento, como fue establecido mediante auto del dieciocho de febrero de dos mil veinte.

CUARTO. Causas de sobreseimiento. En el presente asunto no se actualiza alguna causa de sobreseimiento, como se advierte a continuación:

La causal de sobreseimiento que se prevé en la fracción I, del artículo 365 de la *Ley electoral local* no se actualiza, ya que durante el trámite del presente procedimiento no se materializó alguna de las causales de improcedencia que contempla el numeral 364 de dicha ley.

En efecto, las causales de improcedencia previstas en las fracciones I y II del artículo 364 de la *Ley electoral local* no se actualizan, toda vez que el procedimiento sancionador ordinario que se resuelve no versa sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, ni fue tramitado a instancia de algún militante de partido político, sino que se instauró oficiosamente por la *UTJCE* en uso de las facultades previstas en el artículo 361 de dicha ley.

La hipótesis prevista en la fracción III del artículo 364 de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza, toda vez que el procedimiento ordinario sancionador que ahora se resuelve, relacionado con el incumplimiento del instituto político *MORENA* a sus obligaciones de transparencia en el año dos mil diecinueve, no ha sido materia de otra queja o denuncia en que se haya emitido una resolución por parte de este Instituto.

La causal de improcedencia establecida en el artículo 364, fracción IV de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza ya que, conforme a lo señalado en el considerando primero de esta resolución, esta autoridad sí es competente para conocer y resolver el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa.

Por otra parte, el instituto político *MORENA*, no ha perdido su registro como partido político nacional, por lo que no se materializa la causa de sobreseimiento que establece el artículo 365, fracción II de la *Ley electoral local*.

Por último, no se actualiza el supuesto que establece la fracción III del artículo 365 de la *Ley electoral local* para decretar el sobreseimiento de la presente causa, toda vez que fue iniciada oficiosamente ante la comunicación rendida por el *IACIP* relacionada con el incumplimiento del instituto político *MORENA* a sus obligaciones de transparencia.

De acuerdo con lo anterior, al no haberse actualizado alguna causa de sobreseimiento, procede realizar el estudio de fondo del asunto.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

1. Planteamiento del caso.

El *IACIP* mediante el instructivo de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, emitido en el expediente PDIOT-18/2019 se dio vista a este *Instituto* respecto a determinó que el instituto político *MORENA* omitió la publicación/actualización de la información prevista en las fracciones: IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26, y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, de la *Ley de transparencia*.

Asimismo, la *Ley electoral local* contiene un capítulo en que se establecen los sujetos de responsabilidad, conductas reprochables y sanciones aplicables a cada caso.

Dentro de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la *Ley electoral local*, se encuentran los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en su artículo 346.

Por cuanto hace a las conductas sancionables, los numerales 33, fracción XXIII y 346, fracción VIII de la ley citada, prevén que se considera una infracción el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública por parte de los partidos políticos.

En el mismo tenor, la *ley de partidos* precisa en sus artículos 25, párrafo 1, inciso x); 27 y 28, que los partidos políticos deben cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información, y en ese sentido, deben acatar las reglas relativas a esa materia establecidas en dicha ley, además de lo ordenado por otras leyes.

En ese orden de ideas, la *ley de partidos* precisa en el referido numeral 25, párrafo 1, inciso x), que se debe garantizar el derecho de las personas para

acceder a la información de los institutos políticos de forma directa, conforme a los procedimientos y plazos establecidos por las leyes de transparencia.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, apartado A, fracción I, de la *Constitución* toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, y en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

La *Ley de transparencia*, por su parte, señala en sus artículos 23 y 24, que son **sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información** y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal.

Ahora bien, el artículo 110 de la *Ley de transparencia* establece que cualquier persona podrá denunciar ante los organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esa misma ley y demás disposiciones aplicables.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 115, 118 y 119 de la *Ley de transparencia*, los organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones son competentes para conocer y resolver las denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. La resolución que emitan debe estar fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

Además, los sujetos obligados deben dar cumplimiento a la resolución en un plazo máximo de quince días.

También debe considerarse que de conformidad con el artículo 122 de la *Ley de transparencia*, las resoluciones que emita el IACIP son definitivas e inatacables para los sujetos obligados y únicamente podrán ser impugnadas por el afectado mediante el juicio de amparo.

Asimismo, en términos de los artículos 138 y 139 de la *Ley de transparencia* los organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución. Si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. Si consideran que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles se dé cumplimiento a la resolución.

En caso de que el *IACIP* considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y las medidas o sanciones que resulten procedentes.

Finalmente, los artículos 194, fracción XV y 198 de la *Ley de transparencia* establecen que será causa de sanción a los sujetos obligados **no acatar las resoluciones emitidas por el pleno del IACIP, en ejercicio de sus funciones**, y que dicho organismo **dará vista**, a este *Instituto* o al *INE* según corresponda, **para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables**.

De lo inserto, se puede concluir que:

- Los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y, como tales, podrán ser sujetos de sanción en caso de incumplir con tales obligaciones.
- El *IACIP* es responsable de garantizar en nuestro estado el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Entre sus atribuciones tiene las consistentes en conocer, sustanciar y resolver sobre las denuncias interpuestas por los particulares en contra de los partidos políticos por la probable responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
- Las determinaciones del *IACIP* son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Únicamente podrán ser impugnadas por los particulares ante el Poder Judicial de la Federación, mediante la interposición del juicio de amparo.

- Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el *IACIP* debe dar vista al *Instituto* o al *INE* según corresponda, para que resuelva lo conducente.

En conclusión, la ruta de tramitación de un asunto como el que se resuelve es:

I. Cualquier persona puede denunciar ante el *IACIP* el incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la *Ley de transparencia*.

II. El organismo garante es competente para conocer y resolver de las denuncias sobre incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, incluyendo los partidos políticos. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

III. Las resoluciones que emita el *IACIP* sobre incumplimiento a las obligaciones de transparencia son definitivas e inatacables para los sujetos obligados y éstos deberán cumplirlas en un plazo de quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se les notifiquen las mismas.

IV. El organismo garante, verificará el cumplimiento a la resolución. Si considera que se dio cumplimiento, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y ordenará el cierre del expediente. Empero, si considera que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, notificará al sujeto obligado, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento a la resolución.

V. En caso de que el *IACIP* considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento emitirá un acuerdo de incumplimiento e impondrá las medidas de apremio o sanciones que resulten procedentes.

VI. Cuando un partido político deja de cumplir con las resoluciones emitidas por el *IACIP* respecto del incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, corresponde a dicha autoridad —como responsable de garantizar en nuestro estado, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales—, conocer de la eventual infracción que de tal incumplimiento se derive.

VII. Enseguida, si el *IACIP* determina la existencia de infracción, lo procedente es que dicha autoridad dé vista a este *Instituto*.

VIII. Recibida por el *Instituto* la vista remitida por el *IACIP*, se debe proceder, —como se hizo en el caso— a tramitar el procedimiento sancionador correspondiente y, seguida la secuela procesal, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, determinar el grado de responsabilidad respecto de las conductas materia de la vista y, con base en ello, imponer la sanción que corresponda.

Sentado lo anterior, conviene precisar los hechos atribuidos a *MORENA* y la temporalidad en que acontecieron, como se detalla enseguida:

El *IACIP* instauró el procedimiento identificado con la clave **PDIOT-18/2019** en el que, mediante instructivo del veintidós de enero de dos mil dos mil veinte, declaró el incumplimiento del partido *MORENA*, toda vez que de la verificación realizada por ese organismo garante se constató la falta de información de las fracciones: IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26, y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, de la *Ley de transparencia*, esto en su página de internet; por lo que se impuso a Ricardo Eduardo Bazán Rosales, titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de *MORENA* en el estado de Guanajuato, la medida de apremio consistente en una **AMONESTACIÓN PÚBLICA**.

En tal sentido, de conformidad con la *Ley de transparencia*, se establece, que entre otras obligaciones los sujetos obligados —en este caso los partidos políticos— deben cumplir con lo siguiente:

«**Artículo 26.** Los sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a disposición de la sociedad y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

[...]

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

[...]

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

[...]

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

[...]

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

[...]

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

[...]

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;»

«**Artículo 33.** Además de lo señalado en la Sección Tercera del presente Capítulo de esta Ley, los partidos políticos y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

[...]

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

[...]

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

[...]

VI. Las personas responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

[...]

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;

[...]

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

[...]

XVII. El currículum con fotografía reciente de toda persona precandidata y candidatas a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, y en su caso, el distrito electoral;

[...]

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

[...]

XXVII. El currículum con fotografía reciente de toda persona precandidata y candidatas a cargo de elección popular, con el cargo al que se postula y el distrito electoral;

[...]

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de personas candidatas;

[...]

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.»

Por tanto, la información no publicada por el partido político respecto del artículo 26 de la *Ley de transparencia* es la siguiente:

- a) Los gastos de representación y viáticos.
- b) Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.
- c) Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial.
- d) Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.
- e) Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
- f) Los ingresos recibidos por cualquier concepto.

Por lo que se refiere al artículo 33 de la *Ley de transparencia*:

- a) Los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.
- b) Las minutas de las sesiones de los partidos políticos.
- c) Las personas responsables de los órganos internos de finanzas.
- d) Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes.

- e) El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.
- f) El currículum con fotografía reciente de toda persona precandidata y candidatas a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, y en su caso, el distrito electoral.
- g) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente.
- h) El currículum con fotografía reciente de toda persona precandidata y candidatos a cargo de elección popular, con el cargo al que se postula y el distrito electoral.
- i) Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de personas candidatas.
- j) Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

2. Respuesta al emplazamiento y vista de alegatos.

Mediante auto dictado el doce de agosto de dos mil veinte, se tuvo al instituto político *MORENA* por no contestando las imputaciones que se le formularon.

De igual forma, mediante proveído del seis de noviembre de dos mil veinte se hizo constar que el instituto político denunciado no presentó escrito alguno, en relación con la vista que se le dio a efecto de que realizara las manifestaciones y alegaciones que a su derecho convinieran.

Fijación de la Controversia.

La materia del presente procedimiento, consiste en determinar la responsabilidad y, en su caso, la sanción que corresponda a *MORENA*, derivado del incumplimiento a su obligación prevista en el artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local*, que establece que los partidos políticos deben cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone. Lo cual, actualiza la infracción prevista en el diverso numeral 346 fracción VIII del mismo ordenamiento, en relación con los artículos 25 párrafo 1 inciso x); 27 y 28 de la *ley de partidos*, ello al haber omitido cumplir con lo ordenado en las fracciones: IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26, y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la *Ley de transparencia*.

3. Marco normativo.

Para determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario acudir a la legislación que establece **el deber que tienen los partidos políticos, de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.**

La *Constitución* establece las siguientes obligaciones principales en materia de transparencia:

«**Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. **El derecho a la información será garantizado por el Estado.**

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

[...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

[...]

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.»

Asimismo, resulta relevante citar las disposiciones establecidas en algunos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de acceso a la información:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

«**Artículo 19.** Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, **el de investigar y recibir informaciones y opiniones**, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.»

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

«**Artículo 19.**

[...]

2. **Toda persona tiene derecho** a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de **buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole**, sin consideración de frontera, ya sea **oralmente, por escrito o en forma impresa** o artística, **o por cualquier otro procedimiento.**»

Convención Americana sobre Derechos Humanos

«Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. **Toda persona tiene derecho** a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende **la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole**, sin consideración de fronteras **ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa** o artística, **o por cualquier otro procedimiento de su elección.**»

Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos

«**Artículo 4.-** Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.»

Ahora bien, de manera específica la *Ley de transparencia* previene en lo que interesa al presente asunto lo que se cita a continuación:

«**Artículo 1.** Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o los municipios, de conformidad con los principios y bases establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.»

«**Artículo 2.** Esta Ley tiene los siguientes objetivos:

- I. Transparentar el ejercicio de la gestión pública, a través del acceso a la información;
- II. Promover el derecho de acceso a la información, difundir la cultura de la transparencia, facilitando el conocimiento, la evaluación de la gestión pública y la rendición de cuentas;
- III. Establecer los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
- IV. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia;
- V. Establecer las bases para garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los sujetos obligados de esta ley;
- VI. Establecer las bases para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales y regular los medios de impugnación correspondientes ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato;
- VII. Establecer las bases para que la información de interés público se difunda proactivamente;
- VIII. Establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de esta ley, mediante la aplicación de medidas de apremio y las sanciones que correspondan; y
- IX. Establecer las bases para la participación del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato en las funciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.»

«**Artículo 11.** Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.»

«**Artículo 17.** El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de personas solicitantes con discapacidad, será con costo a las mismas.»

«**Artículo 24.** Los sujetos obligados de esta Ley son:

[...]

XI. Partidos Políticos;»

«**Artículo 25.** Para el cumplimiento de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

[...]

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;»

«**Artículo 26.** Los sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a disposición de la sociedad y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

[...]

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

[...]

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

[...]

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

[...]

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

[...]

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

[...]

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;»

«**Artículo 33.** Además de lo señalado en la Sección Tercera del presente Capítulo de esta Ley, los partidos políticos y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

[...]

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

[...]

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

[...]

VI. Las personas responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

[...]

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;

[...]

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

[...]

XVII. El currículo con fotografía reciente de toda persona precandidata y candidatas a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, y en su caso, el distrito electoral;

[...]

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

[...]

XXVII. El currículo con fotografía reciente de toda persona precandidata y candidatos a cargo de elección popular, con el cargo al que se postula y el distrito electoral;

[...]

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de personas candidatas;

[...]

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.»

«**Artículo 110.** Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.»

«**Artículo 118.** El Instituto debe resolver la denuncia, dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.»

«**Artículo 119.**

[...]

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días hábiles, a partir del día hábil siguiente al en que se le notifique la misma.»

«**Artículo 120.** Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto correspondiente sobre el cumplimiento de la resolución.

El Instituto, verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente.

Cuando el Instituto, considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del Servidor Público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento a la resolución.»

«**Artículo 121.** En caso de que el Instituto, considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del Servidor Público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno del Instituto para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.»

«**Artículo 122.** Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere esta Sección, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución a través del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.»

«**Artículo 194.** Son causas de sanción para los sujetos obligados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:

[...]

XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en ejercicio de sus funciones.»

«**Artículo 198.** Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Pleno del Instituto dará vista, según corresponda, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato o al Instituto Nacional Electoral, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.»

Asimismo, con relación al marco normativo es necesario señalar lo que establece la *Ley electoral local*:

«**Artículo 33.** Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

XXIII. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone, y»

«**Artículo 346.** Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

[...]

VIII. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información;»

Por otra parte, la *ley de partidos* señala en lo conducente:

«**Artículo 25.**

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

[...]

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.»

«**Artículo 27.**

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.»

«**Artículo 28.**

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y **la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.**

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 60. constitucional en materia de transparencia.

3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.»

«**Artículo 33.**

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.»

4. Pruebas.

Respecto de las pruebas aportadas por el *IACIP* y las recabadas por la autoridad sustanciadora en el transcurso de la investigación del presente procedimiento sancionador se tienen las siguientes **documentales**:

a) **Oficio IACIP/PPI-88/17/2019** signado por el actuario del *IACIP*, a través del cual se hace del conocimiento del consejero presidente del *Instituto* el acuerdo del veintidós de enero de dos mil veinte dentro del procedimiento de

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia en el expediente PDIOT-18/2019 promovido contra el sujeto obligado *MORENA*.

- b) **Instructivo** de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, emitido dentro del expediente PDIOT-18/2019, relativo al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del sujeto obligado Partido Político *MORENA*.
- c) **Oficio IACIP/SGA-23/17/2020** signado por el licenciado José Andrés Rizo Marín, Secretario General de Acuerdos del *IACIP* en respuesta al requerimiento formulado por la *UTJCE*.
- d) **Copia certificada** del expediente formado con motivo de la queja **PDIOT-18/2019**, sustanciado y resuelto por el *IACIP*.
- e) **Escrito signado** por el director de Asuntos Jurídicos del *IACIP* en respuesta al requerimiento formulado por la *UTJCE*, por medio del cual se comunicó que, respecto a la carga de la información faltante por *MORENA*, se encontraba en proceso de verificación de seguimiento.
- f) **Oficio IACIP/PPI-377/17/2020** signado por el actuario del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil veinte, emitido por el Pleno del *IACIP*.
- g) **Copia certificada** del acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil veinte, emitido por el Pleno del *IACIP*.
- h) **Copia certificada** de las constancias generadas del veintidós de enero al ocho de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente PDIOT-18/2019.

Las probanzas descritas, **tienen el carácter de documentales públicas**, conforme a lo previsto en los artículos 359 y 411, fracción III de la *Ley electoral local*; **cuyo valor probatorio es pleno**, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.

5. Acreditación de la infracción.

En el caso que nos ocupa se actualiza el incumplimiento del instituto político *MORENA* a sus obligaciones en materia de transparencia en contravención al artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local* y, por ende, la actualización de

la infracción contemplada en el diverso numeral 346, fracción VIII de dicho ordenamiento legal de acuerdo con lo que se expone a continuación:

En primer término, el incumplimiento se encuentra acreditado con las copias certificadas del expediente PDIOT-18/2019 aportadas al sumario y a las que se les concedió valor probatorio pleno.

De las constancias remitidas por el *IACIP*, se advierte entre otras circunstancias, que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve se presentó denuncia en contra de *MORENA* por incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia. Posteriormente, la Dirección de Asuntos Jurídicos del *IACIP* realizó la verificación en la página de internet del denunciado, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Con motivo de dicha verificación, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se emitió la resolución en que se determinó el incumplimiento de *MORENA* la publicación de sus obligaciones de transparencia y se le concedió un plazo de quince días hábiles para su cumplimiento.

Posteriormente, mediante acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, previo informe de seguimiento, el *IACIP* tuvo a *MORENA* por incumpliendo parcialmente con la resolución del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve y se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para dar cabal cumplimiento a la resolución referida, esto es, atender las obligaciones establecidas en las fracciones IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26, así como las fracciones IV, V, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la *Ley de transparencia*.

Luego mediante el acuerdo del veintidós de enero de dos mil veinte en virtud de que persistía la omisión en la publicación/actualización de la información contenida en las fracciones referidas, el *IACIP* tuvo a *MORENA* por incumpliendo parcialmente y le requirió para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles diera cumplimiento publicando y actualizando la información de que se trata.

Posteriormente, el siete de octubre de dos mil veinte, una vez realizada la verificación virtual a efecto de corroborar que la información se encontrara debidamente publicada y actualizada, y en particular que se hubieren solventado los requerimientos efectuados mediante auto del veintidós de enero, el *IACIP* emitió informe de seguimiento del cual se observó que persistía el incumplimiento en la publicación/actualización de las siguientes obligaciones:

1. Con cumplimiento parcial:

Artículo 26, fracciones: IX, XI, XXIII, XXXIII y XLIII.

Artículo 33, fracciones: IV, V, VI, IX, X, XVII, XXVII y XXX

2. Con incumplimiento:

Artículo 33, fracción: XXIV

Cuestión por la cual el *IACIP* ordenó requerir de nueva cuenta a *MORENA* para que dentro del término de cinco días publicara de manera inmediata en su portal de internet sus obligaciones en materia de transparencia.

Las constancias mencionadas generan convicción en cuanto a la existencia de la infracción imputada a *MORENA*, ello al haber incumplido con sus obligaciones en materia de transparencia aunado a que no obra en el expediente constancia alguna que desvirtúe la misma ni tampoco se advierte la promoción de algún medio de impugnación en contra de la determinación referida.

Ahora bien, el artículo 345 fracción I de la *Ley electoral local* establece que los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento legal.

Asimismo, el artículo 346 fracción VIII de la *Ley electoral local* establece como una infracción en que pueden incurrir los partidos políticos el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, aunado a que conforme al artículo 33 fracción XXIII de la misma ley, los partidos políticos deben cumplir las obligaciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.

Del marco normativo expuesto, se advierte que la ley no distingue entre partidos políticos con registro nacional o local, en virtud de lo cual, resulta inconcuso que los partidos políticos nacionales pueden incurrir en responsabilidad al actualizar las infracciones previstas en la *Ley electoral local*, sin que sea obstáculo para ello que la comisión de la infracción de que se trate se deba a actos u omisiones de sus órganos centrales o de dirección nacional.

Siendo competencia de este Consejo General, como se señaló en esta resolución, conocer y resolver lo que en Derecho corresponda por la probable responsabilidad en que incurrió *MORENA*, porque precisamente este procedimiento versa sobre la infracción que actualizó dicho partido político a la *Ley electoral local* con motivo del incumplimiento determinado por el *IACIP* a la *Ley de transparencia*. Es decir, se trata de una violación a disposiciones electorales estatales por parte de un partido político con registro nacional pero con acreditación ante este Instituto.

De esta forma, el estudio concatenado de las circunstancias señaladas conduce a esta autoridad a tener acreditado el incumplimiento de *MORENA* con relación a sus obligaciones en materia de transparencia que se establecen en el artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local*, lo cual constituye una infracción a la normatividad electoral en términos de lo previsto en el diverso 346 fracción VIII del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos 25, párrafo 1, inciso x), 27 y 28 de la *ley de partidos*; y por ende, se determina que es procedente sancionar al infractor en los términos establecidos por la propia legislación local.

Lo anterior se estima así, ya que el acceso a la información es un derecho fundamental en los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo establece en el artículo 6 de la *Constitución*, el cual comprende el derecho a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información pública en posesión de los sujetos obligados e incluye a los partidos políticos, por lo que no puede soslayarse un incumplimiento en relación con las mencionadas obligaciones de transparencia.

En efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha precisado que los partidos políticos, como entidades de interés público, son copartícipes en la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información, de forma oportuna y veraz, y por ello los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna,⁷ de manera que, en casos de incumplimiento, como el que aquí ha quedado actualizado procede imponer la sanción correspondiente.

En suma, se tiene acreditada la infracción imputada a *MORENA* en el presente procedimiento sancionador ordinario, al haber quedado plenamente acreditado en autos que el instituto político enunciado incurrió en incumplimiento con relación a sus obligaciones de transparencia previstas en las fracciones IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26 y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la Ley de transparencia y 33, fracción XXIII, 343, Fracción VIII de la Ley electoral local y 443.1 Inciso K) de la LGIPE.

SEXTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Se procede a determinar la sanción a imponer a *MORENA*, en términos de lo establecido en el artículo 354 de la *Ley electoral local*, que dispone:

⁷ Al respecto véase el SUP-RAP-54/2019 resuelto por el Pleno de la *Sala Superior*, el tres de mayo de dos mil diecinueve.

«**Artículo 354.** Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Respecto de los partidos políticos:

- a) Con amonestación pública;
- b) Con multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
- c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la resolución;
- d) Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que le dio origen, y
- e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución del Estado y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal.»

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que, para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral, ello conforme al criterio contenido en la tesis titulada **SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y SE PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES**⁸.

1. Calificación de la falta.

La conducta que se sanciona respecto al incumplimiento en las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información vulnera preceptos de la *Constitución*, *Ley electoral local*, *ley de partidos* y de la *Ley de transparencia*.

En específico se vulneraron las fracciones IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26 y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la *Ley de transparencia* en relación a los artículos 6 apartado A fracciones I y VIII de la *Constitución*; y los artículos 33 fracción XXIII y 346 fracción VIII de la *Ley electoral local*, con relación con los numerales 25, párrafo 1, inciso x); 27 y 28 de la *ley de partidos*.

Lo anterior, al no cumplirse la obligación del instituto político *MORENA* de publicar y actualizar en su página de internet, la información a que se refieren

⁸ Al respecto véase la tesis XXVIII/2003 de rubro: SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y SE PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 7, año 2004, página 57.

las fracciones IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26 y las fracciones IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos *de la Ley de transparencia*.

2. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida).

El bien jurídico tutelado es aquel valor social material o inmaterial efectivamente protegido por el Derecho, que se contiene en las normas jurídicas vigentes en el Estado y en la comunidad internacional.

En el caso en particular, las disposiciones que se determinaron violadas protegen el bien jurídico tutelado consistente en el **derecho humano de acceso a la información**.

Respecto a la naturaleza del partido político como sujeto obligado, se debe ponderar que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como garante del bien jurídico antes señalado.

3. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada o ambas.

Las conductas sancionables por la norma pueden realizarse en una o varias omisiones, de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales.

Así, de lo expuesto en esta resolución, se puede concluir que la conducta atribuible a *MORENA* se realizó al incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia al omitir publicar diversa información, incumpliendo así con lo ordenado en la resolución del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **PDIOT-18/2019**.

Por ello, se afirma que existe **singularidad** de la conducta infractora.

4. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe valorarse en atención a las circunstancias en que se llevó a cabo, como son:

MODO	TIEMPO	LUGAR
------	--------	-------

La infracción consistió en la omisión de <i>MORENA</i> de publicar diversa información, incumpliendo así con lo ordenado en la resolución del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente PDIOT-18/2019 , así como lo previsto en las fracciones IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26 y fracciones IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.	Mediante acuerdos de fechas cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, y veintidós de enero y siete de octubre de dos mil veinte, el Pleno del <i>IACIP</i> tuvo por acreditado el incumplimiento materia del presente asunto.	La conducta se realizó en el estado de Guanajuato, lugar en el que <i>MORENA</i> , tiene sus oficinas para la atención de los asuntos político-electorales en la presente entidad federativa.
---	---	---

5. Comisión dolosa o culposa de la falta.

La infracción acreditada en esta resolución es **culposa**, conforme con los siguientes razonamientos.

En principio, debe establecerse que no existen en el expediente en que se actúa elementos o indicios que permitan establecer que la omisión acreditada respecto de *MORENA*, haya obedecido a una intención deliberada o a una acción concertada para incumplir sus obligaciones en materia de transparencia, es decir, no obra prueba directa o circunstancial que acredite en este procedimiento que la omisión en que incurrió dicho partido político respecto a la publicación y actualización de la información a que se refieren las fracciones IX, XI, XXIII, XXIV, XXXIII y XLIII del artículo 26 y IV, V, VI, IX, X, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX del artículo 33, ambos de la *Ley de transparencia*, haya sido consecuencia de algún propósito para incumplir con lo prescrito en la norma, aunado a que tampoco se encuentra probado que el referido incumplimiento haya tenido por objeto ocultar información o cualquier otro fin que pueda considerarse ilegítimo.

Además, como se mencionó anteriormente, mediante los acuerdos de fechas cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y veintidós de enero y siete de octubre de dos mil veinte, el *IACIP* reiteró el incumplimiento por parte de *MORENA* a sus obligaciones de transparencia.

En consecuencia, esta autoridad considera que la falta denunciada en el presente asunto debe ser considerada con el carácter de **culposa**.

6. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución.

Las conductas desplegadas se cometieron a través de los portales electrónicos de *MORENA*, puesto que fue en éstos donde se omitió almacenar, publicar y

actualizar diversa información, no obstante que dicho partido estaba obligado legalmente y que se le ordenó por el *IACIP* mediante resolución emitida el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

7. Reincidencia.

De conformidad con el artículo 355, párrafo segundo, de la *Ley electoral local*, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora dentro de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de responsabilidad, lo que en el presente caso se actualiza por las siguientes consideraciones.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar la Jurisprudencia 41/2010, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACION**⁹, la cual enumera los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son:

1. El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;
2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y
3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

En el caso concreto, el nueve de abril de dos mil diecinueve este Consejo General aprobó la resolución dictada en el expediente del procedimiento sancionador ordinario 07/2018-PSO-CG, en la que el partido *MORENA* fue sancionado por el incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 33, fracción XXIII de la *Ley electoral local*.

Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración lo que establece el segundo párrafo del artículo 355 de la *Ley electoral local* el cual dispone que se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere dicha ley, incurra

⁹ Jurisprudencia correspondiente a la Cuarta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, número 7, 2010, páginas 45 y 46.

nuevamente en alguna infracción a ese ordenamiento legal, dentro de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de responsabilidad.

Lo anterior, permite establecer que **se actualiza la reincidencia**, ya que la conducta que ahora se sanciona es la misma que se sancionó en el ejercicio dos mil dieciocho, mediante resolución que se encuentra firme, ha causado estado y fue emitida dos años anteriores a la fecha en que se emite esta resolución.

Sirven de sustento a lo anterior los criterios de tesis de rubros: **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA REINCIDENCIA QUE PREVÉ LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, DEBE ENTENDERSE RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA SIMILAR**¹⁰, la cual señala que, para efectos de la individualización de la sanción, uno de los elementos que habrán de tomarse en consideración es la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y **CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO**,¹¹ que señala que la reincidencia debe entenderse respecto del incumplimiento de una obligación administrativa de naturaleza similar, lo cual, además es acorde al principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas.

Así pues, de acuerdo con el principio de proporcionalidad al momento de aplicar una sanción, respecto de las faltas administrativas para considerar al imputado como reincidente, la falta debe tener la misma naturaleza, ésta debe haber sido sancionada y la sanción impuesta debe tener el carácter de firme al momento de la comisión de la nueva infracción.

Por todo lo anterior, para los efectos del presente procedimiento, se considera como reincidente al instituto político *MORENA*, pues su conducta infractora, debido a que se cumplen los elementos mínimos señalados para considerarlo como reincidente.

8. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

Se considera de **gravedad ordinaria** en atención a lo siguiente:

¹⁰ Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Decima Época. Tesis Aislada. Pág. 3216, Tribunal es Colegiados de Circuito libro 2, enero 2014, Tomo IV, 2005299.

¹¹ Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis Aislada (Constitucional, Penal) Décima Época, Pág. 2069, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, 2002539.

- La infracción es de tipo constitucional y legal.
- Se trata de una sola infracción.
- Se acreditó reincidencia.
- Se estableció previamente que la infracción fue de carácter culposos.

9. Beneficio o lucro.

No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que en los procedimientos administrativos sancionadores las multas no se rigen por el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación al bien jurídico tutelado como en el presente caso acontece.

10. Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades.

Del acuerdo CGIEEG/031/2019 emitido por este Instituto, se advierte que a *MORENA* le corresponde recibir para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en el presente año dos mil veinte, la cantidad de \$27,792,309.6465 (veintisiete millones setecientos noventa y dos mil trescientos nueve pesos 6465/100 m. n).

11. Sanción a imponer.

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la *Ley electoral local* confiere a esta autoridad, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a *MORENA*, por tratarse de un partido político nacional, se encuentran especificadas en el artículo 354, fracción I de la *Ley electoral local*.

Al respecto cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

El artículo citado en último término dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo

éstas: amonestación pública; multa de cincuenta a mil veces la *UMA*, según la gravedad de la falta, criterio conforme al cual también puede ser reducido hasta en un cincuenta por ciento el financiamiento público que corresponde a un partido político; suspensión de financiamiento y en los casos más graves y de reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la *Ley electoral local*, en especial con relación a las obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada, se determina que el partido político *denunciado* debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 354, fracción I, inciso a) de la *Ley electoral local*, consistente en amonestación pública sería insuficiente, mientras que las indicadas en los incisos c), d) y e) del precepto señalado serían desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos mencionados aunado a que *MORENA* no es un partido político local, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo dispuesto en el inciso b) del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa**, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa.

En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer **multa** como sanción a *MORENA*, debido a que inobservó sus obligaciones en materia de transparencia.

Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se

deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante XXVIII/2003,¹² emitida por la *Sala Superior*, misma que a letra dice:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.-

En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 354, fracción I, inciso a) de la *Ley electoral local*, el parámetro de sanciones monetarias que se pueden imponer a los partidos políticos será desde cincuenta a mil veces la *UMA*.

Además, la base o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones, es el valor de la *UMA* vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción. Lo

¹² Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.

anterior, de acuerdo con el criterio sostenido por la *Sala Superior* en la Jurisprudencia 10/2018, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**.¹³

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que conforme las constancias del expediente, las conductas que se imputan a *MORENA*, corresponden al año dos mil diecinueve, tomando en consideración que el incumplimiento a las obligaciones de transparencia se constató en diversos acuerdos emitidos por el *IACIP* y que el valor de valor de la Unidad de Medida y Actualización Diaria en esa anualidad fue de \$84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M. N.).¹⁴

Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado imponer al partido infractor una multa equivalente a **cuatrocientas veces la UMA** en el momento de realización de la conducta infractora, esto es en dos mil diecinueve, a razón de \$84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.);¹⁵ que asciende a un total de **\$33,796.00 (treinta y tres mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)**.

En efecto, acorde con lo establecido por la *Sala Superior* en la tesis jurisprudencial de rubro: **SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES**,¹⁶ para fijar el monto de una sanción, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas a la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

En el caso, se ha mencionado que, aunque la infracción del partido político es de tipo constitucional y legal y se calificó como grave ordinaria, se trata de una sola infracción cometida por *MORENA* de manera culposa. Esto es, sin la intención específica de transgredir las obligaciones de transparencia en materia electoral, existe reincidencia de parte del partido infractor y se le tuvo por incumpliendo con la publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia.

¹³ Registro: 2999. Jurisprudencia. Localización: Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Materia: Electoral. Tesis: 10/2018. Pág. 0

¹⁴ Consultable en la página web: <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/uma/>

¹⁵ Fuente de información: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

¹⁶ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.

Como abundamiento a lo anterior, se señala que la sanción impuesta por esta autoridad es acorde con los parámetros establecidos por la autoridad electoral nacional al resolver el procedimiento sancionador UT/SCG/Q/INAI/CG/168/2018 similar al que aquí se resuelve, ya que el mismo también versaba sobre el incumplimiento del partido político *MORENA* a sus obligaciones de transparencia.

En el asunto indicado, se impuso al partido mencionado una sanción pecuniaria por encima del mínimo, pero sin llegar a la media permitida por la ley, por lo que se corrobora de esta manera la procedencia del monto pecuniario que como sanción se estima procedente en el presente asunto.

Ciertamente, en concepto de esta autoridad, la multa es proporcional y razonable, ya que, conforme a los razonamientos expuestos, se está en presencia de una falta que se cometió derivado de una omisión, situación que obligadamente fue tomada en cuenta por esta autoridad para imponer la multa de mérito, lo cual tiene como finalidad que los partidos políticos, como entidades de interés público, en términos de lo establecido en la Base Primera del artículo 41, de la *Constitución*, cumplan y velen por que se cumplan, al interior de su vida interna, las disposiciones contenidas en todo el marco normativo vigente, dentro del cual se encuentran, indudablemente, aquellas relativas a los derechos humanos de los gobernados tanto al acceso a la información como a la protección de sus datos personales; de ahí que la presente sanción, se reitera, es idónea, eficaz y proporcional con la falta acreditada en el presente procedimiento.

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa el **0.12%** del financiamiento público local correspondiente al año dos mil veintiuno para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el partido infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional la infracción cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, la sanción que se impone al partido político es suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, ya sea por parte del propio partido ahora denunciado u otro sujeto y, asimismo, la cuantía de la multa impuesta en el presente caso constituye una base idónea, razonable y proporcional a la conducta en que incurrió dicho partido, si se considera la afectación del bien jurídico tutelado.

De conformidad con el artículo 355 de la *Ley electoral local*, la cantidad objeto de la multa serán deducida por este *Instituto* de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba *MORENA*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este Consejo General es competente para resolver el presente asunto.

SEGUNDO. La vía del procedimiento sancionador por la cual se tramitó el asunto es la correcta.

TERCERO. No se actualizó alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la *Ley electoral local*.

CUARTO. Es **existente la infracción** atribuida al partido político *MORENA*, en términos de lo establecido en el considerando QUINTO de esta resolución.

QUINTO. Conforme a lo precisado en el considerando SEXTO, se impone a ***MORENA*** una multa de **cuatrocientas veces la UMA** en el momento de realización de la conducta infractora, esto es en dos mil diecinueve, a razón de \$84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.);¹⁷ que asciende a un total de **\$33,796.00 (treinta y tres mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)**.

SEXTO. El monto de la multa impuesta a ***MORENA*** será deducido de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político una vez que

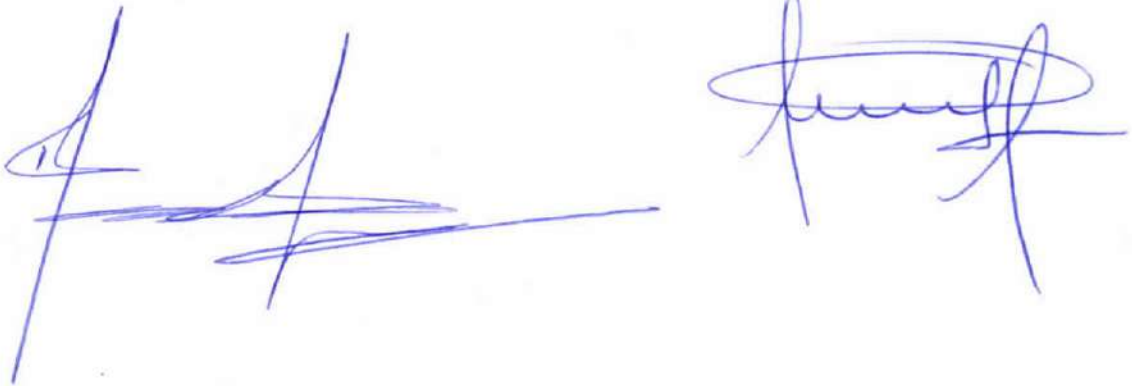
¹⁷ Fuente de información: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

esta resolución haya quedado firme, en términos de lo argumentado en la parte final del considerando SEXTO de esta resolución.

Notifíquese por oficio al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y **de forma personal** al instituto político *MORENA* a través de cualquiera de sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, acompañando copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes.

Cúmplase.

Así lo resolvió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Firman el Presidente y la Secretaria Ejecutiva del mismo. **Conste.**

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is more fluid and cursive.